

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. GPM-PREM-2023-001E-RES

ECON. LEONARDO ORLANDO ARTEAGA
PREFECTO DE MANABÍ

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deberes primordiales del estado: *“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”*;

Que, artículo 6 de nuestra carta magna al referirse al goce de los derechos establece: *“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.”*;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el literal l) del numeral 7 del artículo 76 establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas;

Que, el artículo 33 de nuestra norma suprema indica: *“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”*;

Que, el artículo 82 ibidem refiere que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

Que, el numeral 2 del artículo 225 de la norma ibidem, respecto a la estructura del sector público, determina: *“El sector público comprende: 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.”*;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, artículo 227 de nuestra Constitución dispone: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”*;

Que, el artículo 233 de la norma ibidem proclama que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos;

Que, el artículo 238 de la carta magna establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales;

Que, el artículo 263 de la Constitución, respecto a las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales establece:

“Art. 263.-Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:

- 1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.*
- 2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.*
- 3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.*
- 4. La gestión ambiental provincial.*
- 5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.*
- 6. Fomentar la actividad agropecuaria.*
- 7. Fomentar las actividades productivas provinciales.*
- 8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.*

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales.”;

Que, el artículo 271 de la Constitución de la República establece que: *“Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.”;*

Que, el artículo 288 de la norma constitucional del Ecuador establece que, las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad responsabilidad ambiental y social. Se

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas;

Que, artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “*Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias.*”;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos propios en sus respectivas circunscripciones territoriales bajo su responsabilidad sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 50 indica: “*Atribuciones del prefecto o prefecta provincial. - Le corresponde al prefecto o prefecta provincial: a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado provincial. La representación judicial la ejercerá conjuntamente con el procurador síndico;*”;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 1 determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:

“1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.

2. Los Organismos Electorales.

3. Los Organismos de Control y Regulación.

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.

5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta

(50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato.

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa norma.

Quedan excluidos de esta ley, la contratación de servicios y adquisición de bienes por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, debidamente acreditados, los cuales hayan sido adquiridos con recursos provenientes de fondos de capitales de riesgo público o capitales semilla público.”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: *“Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional.”;*

Que, el artículo 5 de la Ley antes referida, en relación a la interpretación de los contratos administrativos, expresa que: *“Los procedimientos de los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato”;*

Que, el artículo 81 de la citada ley indica:

“Art. 81.- Clases de Recepción. - En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica.

En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una definitiva.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las contrataciones en que se pueda receptor las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse recepciones parciales.

En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará obligatoriamente que dicha recepción se produjo; la negativa del funcionario será causal de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción presunta definitiva producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

La entidad contratante declarará la recepción presunta a su favor, respecto de los contratistas de obras, adquisición de bienes o servicios, incluidos los de consultoría, en el caso de que éstos se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término de diez días, contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. La recepción presunta por parte de la entidad contratante, la realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, que será notificada al contratista de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley.”;

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, define el acto administrativo como: “(...) la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.”;

Que, el artículo 101 del citado Código, acerca de la eficacia del acto administrativo, indica que: “El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado.”;

Que, el artículo 289 del Reglamento General a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica:

“Art. 289.- Prórrogas y suspensiones del plazo contractual. - En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y suspensiones del plazo contractual.

Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato.

(...)”;

Que, el artículo 291 del Reglamento General a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece:

“Art. 291.- Procedimiento para suspensión del plazo contractual. - En todos los casos de suspensión del plazo contractual por iniciativa de la entidad contratante se observará el siguiente procedimiento:

1. Informe motivado del administrador del contrato que justifique las causas de suspensión del plazo contractual. En caso de obras, se necesitará adicionalmente el respectivo informe motivado del fiscalizador. 2. Resolución motivada de la máxima autoridad ordenando la suspensión del plazo contractual, la cual será notificada al contratista, con copia al administrador del contrato y fiscalizador si es que hubiere.”;

Que, mediante Resolución Administrativa GPM-PREM-2023-089-RES de fecha 31 de mayo de 2023, el Prefecto de Manabí expidió la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Provincial de Manabí;

Que, en el apartado 1.3 de la referida Resolución dentro del Nivel Estratégico se crea la Coordinación General de Gestión Institucional;

Que, de conformidad con la Resolución antes citada, la Coordinación General de Gestión Institucional, tiene como misión: *“Coordinar y asesorar a los procesos Agregadores de Valor y procesos habilitantes de Apoyo del Gobierno Provincial de Manabí, a través de la planificación y de las políticas orientadas a una gestión pública, eficiente y participativa de los procesos estratégicos de la entidad, que contribuyan a la mejora continua de la gestión institucional.”;*

Que, de conformidad con el Estatuto, las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Gestión Institucional son las siguientes:

“a) Coordinar, y asesorar los planes y programas institucionales.

b) Coordinar la articulación institucional e interinstitucional para la formulación de la estrategia del Gobierno Provincial e instrumentos técnicos con los procesos Agregadores de Valor y procesos habilitantes de Apoyo –Asesoría.

c) Coordinar políticas, estrategias y mecanismos para la eficiente administración del Gobierno Provincial de Manabí.

d) Coordinar y establecer estrategias que permitan monitorear de manera eficiente la gestión administrativa, financiera, talento humano y contratación pública.

e) Elaborar el Plan Operativo Anual, en el ámbito de su competencia sujetos a las prioridades institucionales anuales y plurianuales; y monitorear su cumplimiento.

f) Ejecutar las funciones que mediante resolución delegue la máxima autoridad del Gobierno Provincial de Manabí.

g) Asesorar a la máxima autoridad en el ámbito de sus competencias.”;

Que, como es de conocimiento público, en la actualidad existe una grave crisis fiscal que se ha generado por la falta de liquidez en el Gobierno Central;

Que, como consecuencia del problema en la caja fiscal, en la actualidad existen incumplimiento en el pago de las transferencias o asignaciones a favor del Gobierno Provincial de Manabí;

Que, esta situación ha derivado en la paralización de varias actividades administrativas que afectan el normal desempeño en el ejercicio de la función pública, siendo una de ellas, la ejecución de los diferentes procesos contractuales;

Que, mediante memorando GPM-DADM-2023-2701-MEM de fecha 14 de diciembre de 2023, de asunto “*Solicitud de suspensión de plazos y términos*” dirigida a la Coordinadora General de Gestión Institucional, el director Administrativo del Gobierno Provincial de Manabí indica:

“(…)

En este sentido, y en razón de salvaguardar el normal desenvolvimiento de los diferentes procesos contractuales, solicito a través de la Coordinación que usted lidera se gestione ante el Prefecto de la Provincia de Manabí, la emisión de una resolución administrativa o el instrumento normativo pertinente que tenga como fin la suspensión de plazos y términos en los diferentes contratos que ejecuta la presente institución, esto hasta que se normalice las actividades en la misma.”;

Que, mediante memorando GPM-CGGI-2023-0048-MEM de fecha 14 de diciembre de 2023, de asunto “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN PROCESOS DE ENTREGA DE BIENES”, la Coordinadora General de Gestión Institucional solicita a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Provincial de Manabí lo siguiente:

“(…)

Por lo expuesto señor Prefecto me permito solicitar a Usted de la manera más respetuosa se sirva autorizar la presente solicitud a fin de que la Procuraduría Síndica proceda con la elaboración del respectivo instrumento jurídico.”

Que, mediante firma electrónica inserta en el memorando GPM-CGGI-2023-0048-MEM, de fecha 14 de diciembre de 2023, el Econ. José Leonardo Orlando Arteaga, autoriza continuar con el trámite correspondiente;

Que, se ha dado cumplimiento a la norma constitucional y demás normativa vigente, asegurando el ejercicio de una seguridad jurídica plena y efectiva, y garantizando el debido proceso;

En uso de las facultades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico del Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública;

RESUELVE:

Artículo 1.- ORDENAR la suspensión del plazo para la recepción de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, en todos los procesos contractuales suscritos por el Gobierno Provincial de Manabí y que al momento se encuentran discurriendo.

De igual manera se suspende el plazo para la recepción provisional y definitiva en los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo que al momento se encuentren discurriendo.

Artículo 2.- DISPONER a los Administradores de los procesos contractuales suscritos por el Gobierno Provincial de Manabí y que al momento se encuentran discurriendo, que consideren la disposición contenida en el artículo 1.

Artículo 3.- DISPONER a los Administradores de los procesos contractuales suscritos por el Gobierno Provincial de Manabí **NOTIFICAR** a todos los contratistas y a los fiscalizadores, cuando corresponda, con el contenido del presente instrumento normativo.

Artículo 4.- DISPONER a los Administradores de los procesos contractuales suscritos por el Gobierno Provincial de Manabí la publicación de la presente resolución en el portal de compras públicas.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - En todo aquello que no estuviere previsto expresamente en la presente Resolución, y en lo que fuere pertinente, se aplicarán las normas establecidas en el Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

SEGUNDA.- Una vez superados los acontecimientos que motivaron la suspensión del plazo para la recepción tanto de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, como para la recepción provisional y definitiva en los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, y previa comunicación y solicitud presentada por la Coordinadora General de Gestión Institucional, se expedirá la respectiva resolución levantando la suspensión establecida en el artículo 1.

TERCERA. - De la ejecución del presente acto administrativo encárguese a la Coordinación General de Gestión Institucional.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio del proceso de notificación dispuesto a los administradores de los procesos contractuales.

SEGUNDA. – Publicar el contenido de la presente Resolución en la página web y en la intranet institucional.

Dado y firmado, en Portoviejo 15 de diciembre del 2023.

NOTIFÍQUESE Y EJECÚTESE;

Econ. José Leonardo Orlando Arteaga
PREFECTO DE MANABÍ

CERTIFICACIÓN

Dictó y firmó la Resolución que antecede el Econ. José Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto de Manabí, en Portoviejo, al 15 de diciembre de 2023.

Comuníquese. -

Lo certifico. – Portoviejo, al 15 de diciembre de 2023

Ab. Joel Alcívar Cedeño
SECRETARIO GENERAL

Elaborado por: Ab. Pablo Cedeño Rodríguez	Revisado por: Econ. Tatiana Pacheco Mendoza	Aprobado y validado por: Ab. Marvin Saul Sacoto Giler
Subdirector de Políticas y Normas	Coordinadora General de Gestión Institucional	Procurador Síndico
Fecha: 15 de diciembre de 2023	Fecha: 15 de diciembre de 2023	Fecha: 15 de diciembre de 2023